

Señor

JUEZ SEXTO (6) CIVIL MUNICIPAL - MANIZALES

La ciudad

E. _____ S. _____ D. _____

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO

RADICADO: 17001400300620200014000

DEMANDANTE: EFIGAS S.A.

DEMANDADO: PRUDENCIO AMADOR Y OTROS

ASUNTO. EXCEPCIONES DE MÉRITO

CARLOS PÁEZ MARTÍN, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.094.563, y Tarjeta Profesional número 152.563 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado judicial de LUZ ANDREA DELGADO GRAJALES, identificada con cédula de cédula 1.053.797.903; NATHALY DELGADO GRAJALES, identificada con cédula de ciudadanía 1.053.813.490; y, LUZ MARINA GRAJALES CÁRDENAS, identificada con cédula de ciudadanía 30.279.246, conforme al poder que me fue conferido, por medio del presente escrito, estando dentro de la oportunidad procesal pertinente, presento excepciones de mérito contra el mandamiento de pago de fecha 23 de julio de 2020, notificado físicamente el 18 de marzo de 2021 , en los siguientes términos:

1

I. OPORTUNIDAD

De conformidad con los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso, la notificación de la demanda no se hizo en debida forma, como quiera que, el artículo 291 señala que, *La parte interesada remitirá una comunicación a quien deba ser notificado, a su representante o apoderado, por medio de servicio postal autorizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en la que le informará sobre la existencia del proceso, su naturaleza y la fecha de la providencia que debe ser notificada, previniéndolo para que comparezca al juzgado a recibir notificación dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su entrega en el lugar de destino. Cuando la comunicación deba ser entregada en municipio distinto al de la sede del juzgado, el término para comparecer será de diez (10) días; y si fuere en el exterior el término será de treinta (30) días. me encuentro en la oportunidad procesar para la contestación de la presente demanda.* Subrayado y negrilla fuera de texto.

Como se observa, el citatorio enviado por la parte demandante, primero no cumple con los requisitos del artículo en mención. Así mismo, teniendo en cuenta que no todos los demandados viven en la ciudad de Manizales, no se está notificando en debida forma. De la misma manera, no hay un acta ante el juzgado de que los demandantes hayan comparecido a notificarse personalmente, por lo que este medio de notificación no operó. Por lo tanto, no podrían aplicarse las reglas del artículo 291. En todo caso, el demandante debería haber realizado la

notificación en los términos del artículo 292 del Código General del Proceso, lo cual no se llevó a cabo en ningún momento.

Por lo anterior, solicito señor juez se me tenga por notificado a partir de la contestación de la presente demanda.

II. FRENTE A LOS HECHOS

FRENTE AL HECHO PRIMERO: No me consta, me atengo a lo probado en el proceso.

FRENTE AL HECHO SEGUNDO: No me consta. Me atengo a lo probado en los documentos del proceso.

FRENTE AL HECHO TERCERO: No es cierto como se relata en la demanda, como quiera que, el demandante presenta proceso ejecutivo por valor de CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SESIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$5.146.367), corresponde al vencimiento de las facturas de 15 meses.

Por lo tanto, en este punto, es preciso manifestar que, ante la primera mora de la factura, la cual es por \$854.007, la compañía de gas debería haber actuado diligentemente y cortar el suministro del servicio y no esperar 15 meses para demandar y generarle perjuicios más gravosos a mis mandantes, pues estas, si bien son las propietarias del inmueble, no tenían como saber que se estaba incumpliendo con los pagos y tampoco fueron notificadas cuando se presentó la primera mora, lo cual, habría sido una casa justa para terminar el contrato de arrendamiento. En ese sentido, la compañía de gas obro de manera poco diligente y en esa medida, debería hacer el cobro de la obligación solo al señor PRUDENCIO, con quien, además, fue que se suscribió el contrato de suministro de gas.

2

FRENTE AL HECHO CUARTO: No es cierto como se relata en la demanda, toda vez que, el INMEDIATO aplicaba desde la primera mora. Por lo tanto, en ese momento debería haberse cortado el suministro y emprender las acciones legales contra el señor PRUDENCIO. Nuevamente, se resalta la falta de diligencia del extremo demandante para iniciar el cobro y corte de manera inmediata.

FRENTE AL HECHO QUINTO: No es cierto como se relata en la demanda, como quiera que, si bien el demandante funda su argumento en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, lo cierto es que, el demandante obvió el parágrafo del citado artículo, el cual reza:

"Si el usuario o suscriptor incumple su obligación de pagar oportunamente los servicios facturados dentro del término previsto en el contrato, el cual no excederá dos períodos consecutivos de facturación, la empresa de servicios públicos estará en la obligación de suspender el servicio. Si la empresa incumple la obligación de la suspensión del servicio se romperá la solidaridad prevista en esta norma". Subrayado por fuera de texto.

En este sentido, era obligación de la empresa suspender el servicio por el no pago del mismo, dentro del término estipulado en el contrato de condiciones uniformes, sin que este exceda los dos periodos de facturación cuando esta sea bimestral y de tres periodos cuando esta sea mensual. Ahora bien, si la empresa no cumple con su obligación de suspender el servicio, como se observa, la consecuencia es que la solidaridad mencionada se rompe y únicamente se podrá exigir el pago de las deudas originadas en el contrato a quien sea el usuario del servicio. Lo anterior, también se ratifica en el Concepto 608, del 28 de agosto de 2018, en donde se pone de manifiesto que la solidaridad se rompe cuando NO hay suspensión del servicio por parte del prestador, cuando existe incumplimiento en el pago oportuno de los servicios públicos facturados dentro del término previsto en el contrato.

En el caso que nos ocupa, la empresa de servicios públicos espero 15 meses para adelantar las gestiones de cobro y de suspensión del servicio.

Respecto al término que tienen las empresas para suspender el servicio por el incumplimiento en el pago del mismo, conviene precisar que, para efectos de la ruptura de la solidaridad, el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 introdujo un plazo máximo; plazo que sugería una aparente contradicción con los términos máximos de suspensión que señala el artículo 140 de la Ley 142 de 1994.

En efecto, el primero de ellos señaló que si el usuario suscriptor incumple con la obligación de pagar oportunamente los servicios facturados, dentro del término previsto en el contrato, el cual no excederá de dos períodos consecutivos de facturación, la empresa estará en la obligación de suspender el servicio, al paso que el segundo dispuso que la falta de pago por el término que fije la entidad prestadora sin exceder en todo caso de dos períodos de facturación, en el evento en que ésta sea bimestral, y de tres períodos cuando sea mensual, da lugar a la Suspensión del servicio.

3

Ambas disposiciones se encuentran actualmente vigentes y tienen una misma finalidad, la cual es obligar a los prestadores a ser eficientes en la ejecución de las obligaciones contractuales, pero de conformidad con el artículo 32 del Código Civil, hay que aplicar los plazos de la norma especial que se ocupa de la suspensión por incumplimiento del contrato, esto es, los del artículo 140.

Además, contempla la Ley 142 de 1994, que el prestador puede verse sometido a la imposición de eventuales sanciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos por inobservancia de las normas a las que debe estar sujeto de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994.

Por otra parte, el propietario respecto del cual se rompe la solidaridad por no suspensión del servicio puede reclamar en cualquier tiempo, esto es, no se aplica el término de cinco (5) meses para reclamar establecido en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, en razón a que la solidaridad se rompe por virtud de la ley.

Al respecto la jurisprudencia del Consejo de Estado¹ ha sostenido lo siguiente:

“5.1. La ley 142 de 1994 y el deber que tienen las empresas de servicios públicos domiciliarios de suspender su prestación en caso de falta de pago como máximo de tres períodos de facturación.

“El problema jurídico que debe decidirse en el caso presente es si los propietarios que no son usuarios están obligados a pagar las facturas de servicios públicos cuando los usuarios dejan de pagar más de tres períodos sin que la empresa los suspenda.

“Según el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, el propietario del inmueble, el suscriptor y el usuario responden solidariamente de las obligaciones que se derivan del contrato de prestación de servicios públicos.

“Al tenor de lo preceptuado por el artículo 140 ídem, el incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en el contrato de condiciones uniformes y, en todo caso, en los de falta de pago por el término que fije la entidad prestadora «sin exceder de tres períodos de facturación» o de fraude a las conexiones, medidores o líneas.

“El artículo 141 del mismo estatuto establece que en los casos de incumplimiento del contrato en forma repetida o de acometidas fraudulentas, la empresa puede tener por resuelto el contrato y proceder al corte del servicio.

4

“De acuerdo con lo anterior, las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios tienen la obligación de suspender el servicio a un usuario que no ha pagado la facturación correspondiente a tres periodos; su omisión desconocería el régimen legal y vulneraría los derechos constitucionales del propietario que no ha utilizado el servicio, al obligarlo a responder solidariamente por aquellas facturas de servicios públicos que sean posteriores al tercer período de facturación, es decir, por aquellas cuentas que se originan después que la empresa de servicios públicos ha incumplido su obligación de suspender el servicio.” Subrayado por fuera de texto.

En nuestro caso, el término de suspensión tardó 15 meses, lo cual, desborda de manera evidente los plazos señalados por ley y jurisprudencialmente, ocasionando además, un perjuicio a mis mandantes.

Sobre la omisión de las empresas de la obligación de suspender el servicio, la Corte Constitucional ha expresado que:

“Las empresas demandadas toleraron a ciencia y paciencia un comportamiento que puede constituir un delito continuado contra el patrimonio, y se limitaron a facturar mensualmente el costo del bien mueble sustraído por medio de una acometida

¹ Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Expediente núm. 1587. C.P. Camilo Arciniegas Andrade, Actores: Ida Escobar Quintero y otros

fraudulenta; en consecuencia, incumplieron durante todo ese lapso su deber de actuar de acuerdo con la ley vigente para poner término a tal situación irregular, y para procurar que se exigiera la responsabilidad correspondiente al autor de la conducta irregular detectada, así como se abstuvieron de reclamar de él el pago correspondiente al daño y los perjuicios que ocasionó. Es indudable, en consecuencia, que las empresas accionadas incurrieron de esa manera en una vía de hecho, y con ella vulneraron los derechos fundamentales de la actora al debido proceso y a la igualdad.”²

FRENTE AL HECHO SÉPTIMO: No es cierto como se relata en la demanda, toda vez que, el corte del servicio de suministro de gas no se hizo de manera oportuna, en los términos señalados del hecho sexto y, por lo tanto, no se podría hacer el cobro de esa suma. En todo caso, el único que debería pagar esa obligación sería el señor PRUDENCIO AMADOR MARTÍNEZ.

FRENTE AL HECHO OCTAVO: No me consta, como quiera que no se conocieron los términos en los que fue celebrado el contrato. En todo caso, me atengo a lo probado en el presente proceso.

FRENTE AL HECHO NOVENO: No me consta.

FRENTE AL HECHO DÉCIMO: Es cierto, conforme se desprende de la factura. En todo caso, como se ha advertido a lo largo de la presente contestación, la factura es el resultante de varias facturas acumuladas, toda vez que, NUNCA se suspendió en servicio en los términos del artículo 130 de la Ley 142 de 1994, como era el deber de la empresa prestadora de servicios, quien dilató el proceso de cobro y suspensión, generando perjuicios a mis mandantes.

5

III. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS

Previo a abordar el planteamiento de las excepciones de mérito que se formulan en este escrito contra el mandamiento de pago, conviene ilustrar al juzgado los hechos que originaron los incumplimientos que se presentaron por parte del extremo demandante en la ejecución del contrato de suministro de gas.

Es importante resaltar que, el contrato de suministro de gas, se realizó con el señor PRUDENCIO AMADOR MARTÍNEZ, quien ostentaba la calidad de arrendatario del inmueble ubicado en la Carrera 23, calle 72-94, piso 3, de la ciudad de Manizales.

Ahora bien, como se manifestó en la contestación de los hechos, la factura del gas presentaba una mora desde el 21 de marzo de 2018 y la empresa de gas, procedió a realizar el corte sólo hasta el 10 de mayo de 2019. En ese orden de ideas, ante el incumplimiento de una obligación de esta naturaleza, no puede el acreedor hacer más gravosa la situación y en ese sentido, hasta máximo el tercer periodo de pago, debería haber suspendido el servicio; inclusive, al segundo mes en que se presentaba la mora.

No obstante, lo anterior, sólo adelantó actividades, después de un año, dejando en evidencia la empresa prestadora del servicio, su falta de diligencia. No puede entonces, pretender ahora el

² Corte Constitucional, Sentencia T 334/01. M.P. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO.
www.paezmartin.com

extremo demandante, cobrar unas sumas de dinero a mis mandantes y aplicar la solidaridad del artículo 130, cuando NO suspendió el servicio y resolvió el contrato en los términos de la Ley 142 de 1994.

IV. EXCEPCIONES DE MÉRITO

De conformidad con lo establecido en el artículo 784 del Código de Comercio, me permito formular las siguientes excepciones, así:

1. Las fundadas en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no supla expresamente.

Como se señaló en los hechos, objeto de la presente contestación, es menester ilustrar al juzgado que en la demanda se olvidó manifestar que el título valor soporte de la acción ejecutiva encuentra su génesis en la factura acumulada de 15 periodos, como quiera el servicio NO se suspendió en los términos señalados por el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, en concordancia con los artículos 140 y siguientes de la misma norma.

De esta manera, si la empresa de gas hubiera suspendido el servicio de manera oportuna, no se habrían causado los valores que a la fecha se imputan, haciendo más gravosa la situación y actuando de mala fe para cobrar posteriormente, las obligaciones que en el presente asunto nos convoca, conforme se desprende del artículo 140 de la ley de servicios públicos, así:

6

“ARTÍCULO 140. SUSPENSIÓN POR INCUMPLIMIENTO. <Artículo modificado por el artículo 19 de la Ley 689 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes:

La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de dos (2) periodos de facturación en el evento en que ésta sea bimestral y de tres (3) periodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas.”

2. Las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa.

Como se mencionó en la excepción anterior, el valor la factura, soporte del título, se causó en virtud de la no suspensión del servicio.

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR FALTA DE PAGO

Sobre este tema, la Superintendencia de servicios públicos ha señalado a través de varios conceptos, tales como el SSPD-OJ-2007 – 214 y el SSPD-OJ-2008 – 196, que el artículo 140 de la

· www.paezmartin.com ·

· Calle 93 # 17 - 45 Of 701 · 317 6482161 ·

· administrativo@paezmartin.com · Bogotá - Colombia ·

Ley 142 de 1994 consagra el deber que tienen las empresas prestadoras de servicios públicos de suspender el servicio frente a la mora en el pago por parte de los usuarios. El artículo en mención, dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 140. Modificado Art. 19 de la Ley 689 de 2001. SUSPENSIÓN POR INCUMPLIMIENTO. El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes:

La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de dos (2) períodos de facturación en el evento en que ésta sea bimestral y de tres (3) períodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas. (...)”.

De acuerdo con la norma citada, frente a la mora del usuario o suscriptor en el pago de los servicios públicos, la empresa no solo tiene la facultad, **sino el deber de proceder** con la suspensión del servicio; Con relación a este deber, la Corte Constitucional, en sentencia T- 723 de 2005, manifestó lo siguiente:

*“Lo anterior significa que cuando no se cancela oportunamente la prestación del servicio público domiciliario, las empresas prestadoras tienen la obligación de suspenderlo máximo al vencimiento del tercer periodo de facturación. Esta Corporación ha señalado que esa exigencia no sólo constituye una garantía para la empresa, quien ejerce un mecanismo legítimo de coacción que le permite asegurar el pago del crédito, **sino que constituye también una garantía para los propietarios de los inmuebles, en el evento en que sus arrendatarios incurran en mora en el pago de sus obligaciones, pues con esta medida se evita el incremento de la deuda.** (...) Subrayado por fuera de texto.*

7

La Corte también ha explicado las consecuencias que se derivan del incumplimiento de las obligaciones a cargo de la empresa prestadora de servicios públicos. Al respecto ha señalado, que los propietarios de un inmueble tienen derecho a obtener la reconexión del servicio, previo el pago únicamente de las tres primeras facturaciones, más los gastos de reinstalación y reconexión, así como los recargos por dicho concepto. (...)”.

3. Los demás personales que pudiere oponer el demandado contra el actor.

➤ No suspensión del servicio de gas de manera oportuna.

Como dan cuenta los hechos señalados, existen consecuencias que se derivan del no cobro de facturas acumuladas; claramente, la Corte Constitucional señaló, mediante sentencia T-490 de 2003, que es una obligación de las empresas, y no una facultad, el suspender la prestación del servicio por falta de pago por parte del usuario o suscriptor:

“(…) Significa ello que cuando no se cancela oportunamente la prestación de un servicio público domiciliario, las empresas prestadoras tienen la obligación de suspender, máximo al vencimiento del tercer periodo de facturación, el suministro una empresa pública que ha

- www.paezmartin.com -

- Calle 93 # 17 - 45 Of 701 - 317 6482161 -

- administrativo@paezmartin.com - Bogotá - Colombia -

dejado acumular más de tres periodos sin realizar la suspensión del servicio, puede proceder a solicitar a la autoridad judicial competente el cobro de hasta los tres (3) primeros periodos, más los intereses de mora y los cargos de reconexión y reinstalación”.(Subrayado fuera de texto).

De esta manera, es claro que al ser una obligación de las empresas prestadoras de servicios Públicos el proceder con la suspensión del servicio frente a la mora en el pago de las facturas por parte de los usuarios, máximo al vencimiento del segundo periodo de facturación, para el caso de cobros bimensuales, o al tercer periodo, cuando se trate de facturación mensual, su incumplimiento trae la consecuencia que los usuarios tienen derecho a la reconexión del servicio, pagando únicamente las dos o tres primeras facturaciones, según sea el caso, más los gastos de reinstalación, reconexión y recargos por mora.

En ese orden de ideas, no puede ahora el demandante, pretender hacer el cobro de sumas, cuando, no suspendió el servicio oportunamente, pues, incumplió su deber como entidad prestadora de servicios, y lesiona los derechos de mis mandantes.

➤ Abuso del derecho

De acuerdo con la Jurisprudencia de la Corte Suprema de justicia se tiene por sentado que el abuso del derecho se configura cuando ocurre una desviación o distorsión de los derechos, ya sea porque se ejercen con la intención de causar daño, porque no existe un interés actual y propio, o porque se desarrollan con evidente imprudencia o negligencia.

8

Debe tenerse en cuenta que esta situación del abuso del derecho puede darse en cualquier tipo de relación jurídica, pública, privada, comercial, laboral, procesal, etc.

Así, se estableció que uno de los criterios en que se presenta el abuso del derecho es cuando un derecho se ejerce con la única intención de causar un daño o sin motivo legítimo, es decir, se utilizan medios legales para causar un perjuicio injusto, situación que se advierte fehacientemente en los actos propiamente abusivos.

En el presente asunto, bajo la aparente bandera de que se cobrar una factura vía ejecutiva por valor de CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SESIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$5.146.367), oculta su intención de generar un grave perjuicio al demandado, como quiera que éste, no se hizo la suspensión de la prestación del servicio a tiempo, como lo señala la ley, y a su vez, lo ha desarrollado la jurisprudencia, contando con los mecanismos para hacerlo.

Por lo tanto, advirtiéndose la configuración de una situación de abuso del derecho corresponde al Juzgado decretar su existencia y condenar en perjuicios a la parte demandante por los daños ocasionados al extremo ejecutado, quien fue víctima de la falta de diligencia de la empresa.

III. PRUEBAS

Solicito señor Juez se decreten como medios de prueba los siguientes:

1. Interrogatorio de parte

Se decrete el interrogatorio de parte de EFIGAS S.A. E.S.P través de su representante legal CARLOS ALBERTO DAVILA MAZENETH, o quien haga sus veces, con el fin de que absuelvan el cuestionario que verbalmente o mediante escrito le formularé. Para el efecto, solicito a su señoría señalar fecha y hora para llevar a cabo esta diligencia.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como fundamento legal Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes

V. ANEXOS

1. Poder debidamente conferido.
2. Documentos relacionados como pruebas.

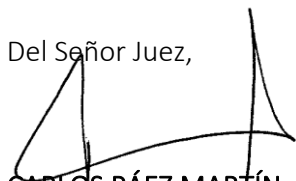
VI. NOTIFICACIONES

Las partes recibirán notificaciones en las direcciones relacionadas en la demanda.

El **suscrito** en la calle 93 No. 17-45, oficina 702 de la ciudad de Bogotá. E-mail: cpaez@paezmartin.com

Demandado en la Avenida Kevin Angel 70-70 Alta Suiza, correo electrónico fcastro@efigas.com.co

Del Señor Juez,



CARLOS PÁEZ MARTÍN
C.C. 80.094.563 de Bogotá
T.P No. 152.563 del C.S. de la J.